



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Derecho Privado

Área de Derecho Civil

Curso 2017/2018

LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS CENTROS ESCOLARES

Estefanía Martín Valles

Tutora: Carmen González León

Junio de 2018

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Derecho Privado

Área de Derecho Civil

**LA PROTECCIÓN DE DATOS EN
LOS CENTROS ESCOLARES**

**DATA PROTECTION IN SCHOOL
CENTERS**

Estefanía Martín Valles
estefania.mv@usal.es

Tutora: Carmen González León

RESUMEN

Durante el tiempo que dura la relación entre el centro escolar y el menor, el centro recaba muchos datos sobre los alumnos y sus familiares. Por lo tanto, los centros deben cumplir la normativa de protección de datos y ser especialmente cuidadosos porque están tratando con datos de carácter personal. Este trabajo trata de reflejar qué datos pueden recabar los centros, cómo deben hacerlo y cómo puede ser tratada esa información.

Junto a los centros escolares y a los menores, se ha de tener en cuenta a los padres o tutores legales de los menores, que son los encargados de prestar el consentimiento para que los datos de sus hijos puedan ser tratados, y de controlar que sus derechos y deberes como titulares de la patria potestad no se vean vulnerados.

También se ha de tener en cuenta que en el ámbito escolar se han instalado las nuevas tecnologías y, debido a su facilidad de comunicación y de uso, cada vez es más frecuente que todos los datos de los alumnos estén informatizados y los centros escolares tengan presencia en redes sociales.

El presente trabajo se pretenden analizar todos estos factores desde una perspectiva jurídica, pero siempre práctica, para garantizar el derecho a la protección de datos de los menores que constan en los ficheros de los centros escolares a los que asisten o han asistido como alumnos.

PALABRAS CLAVE

Protección de datos. Centros escolares. Tratamiento. Menores. Consentimiento. Padres.

ABSTRACT

During the time the relationship between the school and the child lasts, the center gathers a lot of information about the students and their families. Therefore, the centers must comply with data protection regulations and be especially careful because they are dealing with personal data. This work tries to reflect what data the centers can collect, how they should do it and how this information can be treated.

Together with the schools and minors, it is necessary to take into account the parents or legal guardians of the minors, who are in charge of giving consent so that the data of their children can be treated, and to control that their rights and duties as holders of parental rights are not violated.

It must also be borne in mind that new technologies have been installed in the school environment and, due to its ease of communication and use, it is increasingly common that all student data is computerized and schools have presence in social networks.

The present work pretends to analyze all these factors from a legal perspective, always practical, to guarantee data protection right of minors that appear in the files of the schools they attend or have attended as students.

KEYWORDS:

Data Protection. Schools. Tratament. Minors. Consent. Parents.

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	7
II.	CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.....	9
A.	CONCEPTOS BÁSICOS.....	9
a.	Datos de carácter personal.....	9
b.	Datos especialmente protegidos.....	10
c.	Fichero.....	10
d.	Cesión o comunicación de datos.....	11
e.	Tratamiento de datos.....	11
B.	PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS.....	12
a.	Calidad de datos.....	12
b.	Información y transparencia de datos	12
c.	Seguridad de datos.....	13
d.	Deber de secreto.....	14
C.	DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES.....	14
a.	Derecho de acceso.....	15
b.	Derecho de rectificación.....	16
c.	Derecho de cancelación, derecho de supresión y derecho al olvido.....	16
d.	Derecho de oposición.....	17
e.	Derecho de limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad de los datos.....	17
D.	CONSENTIMIENTO.....	18
a.	Consentimiento prestado por el menor.....	18
b.	Consentimiento prestado por representante legal.....	19
III.	TRATAMIENTO DE DATOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS.....	22
A.	RECOGIDA DE DATOS POR LOS CENTROS ESCOLARES.....	22
a.	Tipos de datos.....	22
b.	Procedimiento de recogida de datos.....	24
B.	TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS ALUMNOS.....	26
a.	Constitución y declaración de ficheros.....	26
b.	Publicación de datos.....	28
c.	Calificaciones.....	30
d.	Acceso a la información de los alumnos.....	31
e.	Comunicación o cesión de los datos de los alumnos.....	34

C.	TRATAMIENTO DE DATOS EN INTERNET.....	37
a.	Utilización de plataformas educativas.....	38
b.	Publicación de datos en la web de los centros	41
c.	Publicación de datos en redes sociales.....	42
D.	TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS.....	43
E.	VIDEOVIGILANCIA.....	46
IV.	CONCLUSIONES.....	49
V.	BIBLIOGRAFÍA.....	51

I. INTRODUCCIÓN

El centro escolar es un lugar en el que el menor va a pasar una gran cantidad de tiempo durante su infancia y adolescencia. En él desarrolla buena parte de su personalidad y sus habilidades académicas y sociales, y este centro contribuirá en gran medida a la formación del carácter y de los valores personales del menor. Durante todos los años que dura la relación entre el centro escolar y los menores, éstos adquieren muchos datos sobre los alumnos y sus familias. Esta información no deja de ser extremadamente personal ya que, al fin y al cabo, están tratando con menores y su círculo más cercano de familiares. Por ello los centros deben ser especialmente respetuosos con los datos y guardar un mayor recelo de lo habitual si cabe, con la normativa de protección de datos. Debido a esta relación que se crea entre los centros escolares y los menores, en este trabajo tratamos de reflejar, desde una perspectiva jurídica, qué datos pueden recabar los centros, cómo deben hacerlo y cómo puede debe ser tratada esta información.

Así mismo, junto a los centros escolares y a los menores, se ha de tener en cuenta a los padres o tutores de los menores. Éstos actúan como nexo en muchas ocasiones, son los encargados de prestar su consentimiento para que sean tratados los datos de sus hijos, y deben colaborar con los profesores en la formación, aprendizaje y sobre todo educación de los menores. Éste tercer elemento, en ocasiones ve vulnerado alguno de los derechos que le son conferidos como titular de la patria potestad como es el derecho a la información sobre sus hijos en relación a las cuestiones académicas, sobre todo en contextos de crisis matrimoniales, planteamiento que también se quiere reflejar en éste texto.

No podemos tampoco olvidarnos del hecho de que la sociedad ha evolucionado y las nuevas tecnologías invaden cada vez más esferas de nuestra vida cotidiana, volviéndose un constante imprescindible en nuestro día a día, alcanzando también el ámbito académico. La facilidad de comunicación y de uso ha hecho que los sistemas tradicionales como la presentación de información en papel, se haya visto sustituido por sistemas informáticos. A día de hoy, podemos encontrarnos como, en la mayoría de los centros escolares, las calificaciones de los alumnos, notificaciones a los padres y demás información o comunicaciones académica, se hacen a través de plataformas informáticas. O podemos encontrarnos con situaciones que hace unos años no podíamos ni imaginar,

como es la videovigilancia para el control en los centros o que se permita el uso de datos biométricos, con sistemas de acceso mediante huella dactilar dentro de los colegios.

La llegada de las nuevas tecnologías al ámbito académico ha aportado muchos beneficios, pero no podemos olvidar ni ignorar los problemas que también plantea. La tendencia actual a grabar y compartir la vida personal ha calado, como no podía ser de otra manera, en el ámbito escolar, ya que los centros no pueden evitar compartir las actividades que realizan con sus alumnos, y cada vez más los padres tienden a difundir también ese aspecto de la vida de sus hijos, provocando que en ocasiones los derechos de honor, intimidad y propia imagen, al igual que el derecho a la protección de los datos, se vea en ocasiones menoscabado.

Este trabajo, por tanto, tiene como principal objetivo hacer confluir todos estos factores, desde una perspectiva jurídica pero también especialmente práctica, guiado y apoyado por la información obtenida de la Agencia Española de Protección de Datos.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La protección y tratamiento de datos personales se regula en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD)¹, en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante RLOPD)². Y en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Es conocido como Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD)³. En relación a los centros escolares, en nuestro ordenamiento jurídico contamos con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación⁴ (en adelante LOE) y, en materia de protección de datos, nos interesa especialmente lo establecido en su Disposición Adicional vigesimotercera.

A. CONCEPTOS BÁSICOS

Antes de empezar con el estudio del tema en concreto, comenzaremos haciendo alusión a una serie de conceptos básicos y a su aplicación en el ámbito escolar.

a. Datos de carácter personal

Se considera dato de carácter personal cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables [art.5.1. f) RLOPD]. El concreto, el RGPD precisa que dato personal será toda información sobre una persona física identificada o identificable (el interesado). Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por

¹ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE-A-1999-23750

² Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. BOE-A-2008-979.

³ REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

⁴ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE-A-2006-7899

ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona (art.4.1 RGPD).

Aplicando este concepto al ámbito académico, podemos considerar dato de carácter personal los nombres y apellidos del alumno, de sus padres, su dirección, número de teléfono, correo electrónico, etc. Así mismo, también se consideran como tal las imágenes de los alumnos o, en relación con sus padres, la profesión, estudios o lugar de trabajo de los mismos. Cada persona es titular de sus respectivos datos de carácter personal⁵.

b. Datos especialmente protegidos

Se considera que los datos personales son especialmente sensibles cuando afectan a la esfera más íntima, personal y privada de las personas. La LOPD, en su art.7, encuadra en esta categoría aquellos datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias de una persona. También los que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual. Pueden ser así mismo considerados como tal los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas.

El RGPD denomina a estos datos especialmente protegidos como “categorías especiales de datos”, e incluye, además de los anteriormente mencionados, los datos personales que revelen las opiniones políticas, el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o los relativos a la orientación sexual de una persona física (art. 9.1 RGPD).

c. Fichero

El RGPD, en su art.4.6), considera como fichero todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. Según nuestra LOPD los ficheros pueden ser de titularidad privada o pública, y deben ser notificados previamente a la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) e inscritos en el Registro General de Protección de Datos. Sin embargo, el nuevo RGPD, suprime esta obligación de inscripción. Son ejemplos de ficheros el “expediente académico del alumno”, “personal docente”, “videovigilancia”, etc.

⁵ Como ayuda y referencia para iniciarnos en el estudio del derecho de protección de datos, y concretamente los datos de menores de edad, se puede consultar la monografía de ANDREU MARTÍNEZ, B. *La protección de datos personales de los menores de edad*. Aranzadi. Navarra. 2013.

d. Cesión o comunicación de datos

Se considerará cesión o comunicación de datos toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado [art.3.i) LOPD y art.12 RGPD]. Los destinatarios o cesionarios de los datos serán las personas físicas o jurídicas, autoridades públicas, servicios u otros organismos a los que se le comuniquen. Los titulares de los datos no son nunca los cesionarios de sus propios datos, aunque no se hayan obtenido de ellos. Se considerará cesión de datos la comunicación de los datos de los alumnos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a los Servicios Sociales o Sanitarios, o al AMPA. También en los casos en los que el menor cambia de centro docente y se deben transferir los datos del mismo de un centro al otro.

Las empresas que colaboran con el centro docente prestando los servicios de comedor, transporte o médico, tienen la consideración de encargados del tratamiento de datos, por lo que la comunicación de datos a estas entidades no se considerará cesión de datos.

e. Tratamiento de datos

Será tratamiento de datos cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción [art.4.2) RGPD]. En nuestro RLOPD también se incluyen como tratamiento de datos las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

El *responsable del tratamiento de los datos* será la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento [art.3.g) LOPD]. Si el centro escolar es concertado o privado, el responsable será el propio centro, mientras que si se trata de un centro público, el responsable será normalmente la Administración pública correspondiente, es decir, la Consejería de la Comunidad Autónoma competente en materia de Educación⁶.

Debemos diferenciar este concepto del de *encargado del tratamiento de los datos*, ya que en este caso, será una persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier

⁶ Informe AEPD 143/2004. *Responsable del fichero en la enseñanza pública*. Madrid. 2004.

otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento [art.3.g) LOPD]. Esto sucede, por ejemplo, en los casos en los que el centro escolar necesita contratar a una empresa para que preste el servicio de comedor, transporte escolar o actividades extraescolares.

B. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Con objeto de preservar el derecho fundamental a la protección de datos, la LOPD establece una serie de principios generales, regulados en los art. 4 a 12. Como señala la SAN, Sección 1ª, de 25 de julio de 2006⁷, “*dichos principios sirven para delimitar el marco en el que debe desenvolverse cualquier uso o cesión de datos de carácter personal*”.

a. Calidad de datos

Los datos que sean recogidos y tratados deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. En la Resolución 00259/2010⁸, la AEPD consideró que *el instituto ha vulnerado el principio de calidad de los datos, en lo que se refiere al uso proporcional de los mismos, en relación con el tratamiento de datos efectuado a partir de la captación y grabación de imágenes de alumnos en los baños del mencionado centro mediante cámaras de videovigilancia*.

Los datos no pueden usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que se hayan recogido, y en dicha recogida no pueden mediar medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Además, los datos deben ser exactos y puestos al día y, en el caso de que no lo sean, deberán ser suprimidos o actualizados (art.4 LOPD).

b. Información y transparencia de los datos

Se deberá informar, de modo expreso, preciso e inequívoco, a los interesados cuando se soliciten, recaben u obtengan sus datos personales, incluso en aquellos casos en los que no sea necesario su consentimiento (art.5 LOPD):

⁷ SAN, Sección 1ª, de 25 de julio de 2006. Rec. 210/2005.

⁸ Resolución R/00259/2010, de 8 de marzo de 2010, de la Agencia Española de Protección de Datos. Procedimiento N.º AAPP/00075/2009. LALEY 300/2010.

- De la existencia de un fichero o tratamiento de datos, su finalidad y el destinatario de la información.
- El carácter obligatorio o facultativo de facilitar los datos, y las consecuencias tanto de suministrarlos como de negarse a ello.
- De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- Y de la identidad y dirección del responsable del tratamiento.

El RGPD establece algunas precisiones. La información debe ser facilitada de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, especialmente cuando vaya dirigida a un niño (art.12 RGPD). Así mismo, también se deberá informar del plazo durante el cual se conservarán los datos personales y los criterios utilizados para determinar este plazo (art.13 RGPD). Además, deja de considerar la información y la transparencia como principios para pasar a considerarlos derechos de los titulares de los datos personales (Capítulo III RGPD).

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 292/2000⁹ resaltó la relevancia del derecho a la información, señalando que *"son elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos"* y que *"...es evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad de cesión de sus datos personales y sus circunstancias como del destino de estos, pues solo así será eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de su derecho a controlar y disponer de sus datos personales"*.

c. Seguridad de los datos

Las administraciones educativas y los centros, como responsables del tratamiento de los datos personales, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado (art.9 LOPD). Estas medidas de seguridad están establecidas en el Título VIII del RLOPD.

En el RGPD, sin embargo, no se establece un catálogo de medidas de seguridad. En este caso, el responsable hará una valoración del riesgo de los tratamientos que realice y

⁹ STC, Pleno, 292/2000 de 30 de noviembre del 2000. Rec. 1463/2000. LALEY 11336/2000.

aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado, teniendo en cuenta para ello, el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas (art.32.1 RGPD).

d. Deber de secreto

Todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal estarán obligados a guardar secreto sobre los mismos. Este deber es de obligado cumplimiento para todas las personas que presten sus servicios en los centros y Administraciones educativas. Esta obligación subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular o responsable del fichero (art.10 LOPD)

La AEPD, en su Resolución 00308/2018¹⁰, consideró como una vulneración del principio del deber de secreto el que un colegio hubiera posibilitado el acceso por terceros a la imagen de un menor sin contar con el consentimiento de los padres del menor titular de tales datos.

El RGPD, por su parte, recoge los principios relativos al tratamiento en su artículo 5. Establece seis principios: a) licitud, lealtad y transparencia; b) limitación de la finalidad; c) minimización de datos; d) exactitud; e) limitación del plazo de conservación y f) integridad y confidencialidad.

C. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

Para garantizar la efectiva protección de los datos personales, se otorga a los titulares una serie de derechos. La LOPD recoge los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, conocidos por su acrónimo ARCO (art.14 a 17 LOPD y art.23 a 36 RLOPD).

El RGPD, por su parte, ha ampliado los derechos del titular de los datos personales. Recoge los derechos de transparencia, información (considerados ambos como principios en la LOPD), acceso, rectificación, supresión o derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición (arts.12 a 21 RGPD).

¹⁰ Resolución AEPD 00308/2018 de 15 de marzo de 2018. Proc. PS/00483/2017. LALEY 13516/2018.

Son derechos personalísimos, por lo que solo podrán ser ejercitados por su titular o sus representantes legales en el caso de ser menor de edad (art.23 LOPD). La AEPD, en su Informe 227/2006¹¹, entró a valorar si sería posible que un menor de edad tuviera acceso a sus propios datos personales sin contar con la asistencia de un representante, determinando que sí, siempre que contase con más de catorce años y las condiciones de madurez suficiente. Aunque este Informe solamente hace referencia al derecho de acceso, consideramos que puede ser aplicable al resto de derechos que se recogen en este apartado.

Estos derechos serán ejercitados ante el centro educativo o la Administración educativa, como responsables del tratamiento, los cuales siempre debe contestar a los interesados, incluso cuando no dispongan de los datos correspondientes.

a. Derecho de acceso

El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento y, en su caso, la finalidad del mismo, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos (art.27.1 RLOPD). Añade el RGPD el derecho a obtener la información de las categorías de datos personales de que se trate, así como el plazo previsto de conservación de los mismos, o los criterios para determinarlo (art.15 RGPD).

Se trata de un derecho que, a diferencia del resto, solo podrá ser ejercitado una vez cada doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes (art.15 LOPD).

El responsable del tratamiento deberá facilitar la información al interesado, de manera gratuita, en el plazo de un mes, o la respuesta de que no dispone de ellos a través de una de las siguientes vías: visualización en pantalla, escrito, copia o fotocopia remitida por correo, correo electrónico o cualquier otro sistema que sea adecuado (art.28 y 29 RLOPD).

Si la documentación es relativa a datos de salud, recibirá el tratamiento de información clínica cuya copia hay que facilitar a los interesados, en aplicación de la Ley 41/2002, de

¹¹ Informe AEPD 227/2006. *El acceso a datos escolares por padres y familiares*. Madrid. 2006.

14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica¹².

b. Derecho de rectificación

Los alumnos o sus padres o tutores, como afectados, tienen derecho a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos. Deberán acreditar qué dato es el erróneo o incompleto y la corrección que debe hacerse. El centro o la Administración escolar, como responsables del tratamiento, deberán resolver en el plazo de 10 días y, en el caso de que haya cedido previamente los datos, deberá comunicarlo al cesionario para que éste también proceda a rectificar los datos (art.16 LOPD, art.31 y 32 RLOPD, y art.16 RGPD).

Este derecho no se aplica a las calificaciones o el contenido de los informes del expediente académico ni psicopedagógicos, los cuales se rigen por su normativa específica¹³.

c. Derecho de cancelación, derecho de supresión y derecho al olvido.

Por el derecho de cancelación, los datos del interesado que resulten inadecuados o excesivos podrán ser suprimidos. Al igual que en el ejercicio del derecho de rectificación, los datos inadecuados o excesivos deberán ser indicados por el afectado, y el responsable del tratamiento deberá resolver en el plazo de 10 días (art.31 y 32 RLOPD).

La cancelación dará lugar a un bloqueo de los datos, los cuales solo serán conservados por las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales para poder ejercitar las acciones de responsabilidad que correspondan, durante el plazo de prescripción correspondiente, transcurrido el cual serán suprimidos (art.16 LOPD).

Los centros escolares deberán conservar los expedientes de los alumnos en la medida en la que pueden ser solicitados por los mismos una vez finalizados sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de educación aplicable. En relación con los datos de salud del alumno, estos sí deberán ser cancelados cuando este finalice su

¹² Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE-A-2002-22188
Informe de la Agencia Española de Protección de Datos: *Guía para Centros Educativos*. “Guías Sectoriales AEPD”. Madrid. 2017. (p.52)

¹³ Informe de la Agencia Española de Protección de Datos: *Guía para Centros Educativos*. “Guías Sectoriales AEPD”. Madrid. 2017. (p.53)

escolarización en el centro, siempre y cuando no sean necesarios para el desarrollo de la función educativa¹⁴.

El RGPD recoge este derecho de cancelación de los datos, pero pasa a denominarlo **derecho de supresión**. Además, incluye el **derecho al olvido**, entendiéndolo como la manifestación de los derechos de cancelación y oposición aplicados a los buscadores de Internet. Permite impedir la difusión de datos personales a través de Internet si no se cumplen ciertos requisitos (art.17 RGPD)¹⁵.

d. Derecho de oposición

Es el derecho de los afectados a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo, en el supuesto de que concurra un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal que lo justifique, siempre que una ley no disponga lo contrario (art.21 RGPD).

El derecho de oposición se ejercitará mediante solicitud dirigida al centro o Administración escolar, como responsable del tratamiento, indicando los motivos fundados y legítimos que justifican el ejercicio del derecho, para que resuelva en el plazo de 10 días (art.34 y 35 LOPD).

e. Derecho de limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad de los datos

El RGPD añade estos dos nuevos derechos (junto con el derecho al olvido) a los derechos del titular de los datos personales, que hasta entonces eran los denominados derechos ARCO.

El derecho a la limitación del tratamiento es el derecho a suspender las operaciones del tratamiento de los datos personales del interesado cuando éstos no sean exactos, su tratamiento sea ilícito o el responsable ya no los necesite para los fines del tratamiento (art.18 RGPD).

Por su parte el derecho a la portabilidad de los datos es un complemento del derecho de acceso. Permite obtener al interesado los datos personales que le incumban, que haya

¹⁴ Informe de la Agencia Española de Protección de Datos: *Guía para Centros Educativos*. “Guías Sectoriales AEPD”. Madrid. 2017. (p.54)

¹⁵ <https://www.datax.es/blog-actualidad-proteccion-datos/es/los-nuevos-derechos-de-los-ciudadanos-europeos-en-proteccion-de-datos/> Ref. 11 de junio de 2018.

facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos de forma directa a otra entidad (art.20 RGPD).

D. CONSENTIMIENTO

La LOPD establece que, para poder tratar los datos de carácter personal, el afectado deberá consentir inequívocamente, salvo que la ley disponga otra cosa (art.6.1). También dispone que no será preciso ese consentimiento cuando los datos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas (art.6.2). Veremos, por tanto, a lo largo de este texto que los centros y Administraciones escolares, en determinadas situaciones, amparados por este precepto y en el ejercicio de su función orientadora y educativa, no necesitarán del consentimiento del interesado para poder tratar sus datos personales (DA^a23 LOE). Pero siempre que se distancien de esta función, deberán contar con el consentimiento inequívoco del afectado, por lo que vamos a concretar cuándo debe el consentimiento ser prestado por los padres o tutores como representantes del menor, y cuando puede el consentimiento ser otorgado por el propio menor.

a. Consentimiento prestado por el menor

Establece el art.13 del RLOPD que los menores podrán consentir por sí mismos el tratamiento de sus datos personales cuando sean mayores de catorce años, salvo en los casos en los que la Ley exija asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. Para facilitar el mismo, la información dirigida a los menores deberá expresarse en un lenguaje que sea fácilmente comprensible por ellos.

La AEPD ha matizado este precepto. En su Informe 466/2004¹⁶ se planteaba si la edad a la cual se puede recabar directamente de un menor sus datos personales depende del tipo de dato personal y del nivel de protección que al Ley confiere al mismo. Determina la AEPD que no depende de estas cuestiones, sino de una confluencia entre la edad del menor y su madurez, diferenciando entre los mayores de catorce años y los menores de esa edad. En el primero de los casos, establece que *“nuestro ordenamiento jurídico viene, en diversos casos, a reconocer a los mayores de catorce años la suficiente capacidad de*

¹⁶ Informe AEPD 466/2004. *Comunicación a los padres de las calificaciones de sus hijos menores de edad*. Madrid. 2004.

discernimiento y madurez para adoptar por sí solos determinados actos de la vida civil. Pero matiza más adelante que “la minoría de edad no supone una causa de incapacitación, pero debe ser analizada en cada caso concreto a los efectos de calificar la suficiencia en la prestación del consentimiento en atención a la trascendencia del acto de disposición y a la madurez del disponente”.

En relación con los menores de catorce años, establece la AEPD que *“no puede ofrecerse una solución claramente favorable a la posibilidad de que por sí mismos puedan prestar el consentimiento al tratamiento, por lo que debe buscarse la referencia en el art. 162.1 CC, teniendo en cuenta, fundamentalmente, sus condiciones de madurez”.*

El RGPD, en su art.8, ha querido hacer referencia a la cuestión del consentimiento otorgado directamente por menores en relación con los servicios de la sociedad de la información. En este caso, el Reglamento ha aumentado la edad legal a los dieciséis años, posibilitando que los Estados miembros establezcan una edad inferior a tales fines, siempre que no sea inferior a trece años¹⁷.

b. Consentimiento prestado por representante legal

En aquellos casos en los que los menores no puedan consentir por sí mismos el tratamiento de sus datos personales, serán sus representantes legales (los padres o tutores), los que deberán prestar dicho consentimiento.

En relación con el proceso de escolarización y al tratamiento de datos personales que ello conlleva, el procedimiento de admisión debe contar con la firma, como muestra de consentimiento expreso y escrito, de ambos progenitores o tutores legales. También se requerirá el consentimiento expreso de ambos para proceder al cambio de centro del menor. En general, para aquellas decisiones menos trascendentes, suele ser suficiente con que uno de los progenitores preste su consentimiento, pero para aquellas decisiones consideradas como extraordinarias, entre las que se encuentra la difusión de imágenes del menor, será imprescindible el consentimiento de ambos¹⁸.

¹⁷ En España, el nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 121/000013, de 18 de abril de 2018, baja la edad para consentir el tratamiento de los datos personales a los trece años. Esta rebaja ha generado todo tipo de críticas y valoraciones por parte de los distintos partidos políticos, realizando enmiendas en las cuales se proponen edades desde los dieciséis que marca el RGPD, a los catorce que establece la LOPD actualmente.

¹⁸ Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para

En principio, la cuestión del consentimiento por parte de los padres o tutores no plantea muchos problemas, pero debemos preguntarnos qué sucede en los casos en que los progenitores no se ponen de acuerdo sobre si los datos del menor pueden ser cedidos o tratados, discrepancia que surge muy a menudo en contextos de crisis matrimoniales. Independientemente de la existencia o no de crisis matrimonial en la pareja, se debe indicar que, en caso de desacuerdo, será el Juez quien tenga competencia para resolver y atribuir la faculta de decidir al padre o a la madre (art.156 CC).

Cuando se dan estas situaciones de ruptura de la unidad familiar, el centro escolar al que acude el hijo de la pareja también se ve implicado y en ocasiones se producen situaciones que llegan a afectar a los derechos de protección de datos, intimidad e información de los afectados. Estas situaciones se producen a menudo debido al desconocimiento de los docentes acerca de quién ostenta la patria potestad del menor, y quién la custodia del mismo. La patria potestad implica que su titular ostenta la representación legal de los menores, y es quien debe tomar las decisiones que afectan al desarrollo integral del menor. Por el contrario, la guardia y custodia no da derecho a su titular a tomarlas, sino que sólo le faculta a tener al hijo en su compañía y tomar las decisiones menos importantes del día a día¹⁹.

Por lo general, a pesar de la crisis matrimonial, ninguno de los padres pierde la patria potestad de sus hijos, por lo que ésta es ejercida por ambos. Sin embargo, la custodia del menor sí se puede atribuir a uno de los dos progenitores, salvo los casos de custodia compartida. En estos casos el centro considera (bien porque no conoce la situación privada familiar, por falta de información acerca de la diferencia entre estos dos conceptos o por la exigencia del progenitor custodio al centro de no dar dicha información al otro) que sólo uno de los padres, aquel que tiene atribuida la guardia y custodia del menor, debe prestar el consentimiento para la cesión de datos de sus hijos, incluido el tratamiento de imágenes, y es el único al que el centro escolar debe informar sobre las cuestiones concernientes a sus hijos, cuando legalmente ambos progenitores deberían consentir y ser informados al respecto.

padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad. BORM 25 octubre 2017. LALEY 16958/2017.
¹⁹ CAMPO IZQUIERDO, A.L. “El divorcio en la escuela”. *Revista de Derecho de Familia* num.54/2012 parte Tribuna Abierta. 2012. BIB 2013/14877 ARANZADI. S.A.U., Cizur Menor.

Esto ha provocado situaciones en las que el progenitor no custodio ve como sus derechos como titular de la patria potestad, entre los que se encuentra el derecho a ser informado sobre el proceso de aprendizaje e integración socio-educativa de su hijo [art.4.1.d) Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación²⁰] se ven menoscabados. Por ejemplo, en la Resolución de la AEPD de 2011²¹, el progenitor no custodio, en este caso el padre, reclamaba su derecho de acceso a los datos de su hijo menor de edad. Solicitaba la información sobre el centro al que acudía el menor, informes relativos a su educación y desarrollo, ausencias del centro, y cualquier comunicación que el centro efectuara a la madre. Aportaba la sentencia en la cual se atribuía la guardia y custodia del menor a la madre, pero se mantenía la patria potestad compartida por ambos progenitores. La AEPD consideró que, al ser ambos titulares de la patria potestad, ambos tenían el mismo derecho a conocer datos sobre el menor y, por tanto, la escuela debía facilitarle todos los datos sobre su hijo que constaran en los ficheros de la escuela, sin aportar datos de la madre o de terceras personas, ya que eso podría suponer una cesión sin consentimiento de esos datos.

También en este sentido se expresa la Resolución de la AEPD de 2012²², en la cual el progenitor no custodio no se oponía a que el centro escolar tratara imágenes de sus hijos, sino que lo que reclamaba es que se pidiera su consentimiento al igual que se había solicitado el de la madre de los niños.

Podemos establecer entonces que, con carácter general, salvo que exista una resolución judicial que disponga lo contrario, los progenitores separados o divorciados tendrán derecho, en igualdad de condiciones, a estar puntualmente informados de todo lo relacionado con el desarrollo integral de sus hijos en el ámbito escolar y de todos los aspectos relacionados con el proceso educativo de éstos; a recibir información académica sobre los mismos y sobre su estado de salud físico y psíquico, y a poder solicitarla, tengan o no la guarda y custodia del menor. El centro, por tanto, deberá mantener de oficio la comunicación con ambos²³, deberá informar, por duplicado y de forma independiente, de

²⁰ Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. BOE-A-1985-12978.

²¹ Resolución AEPD Nº: R/01490/2011. Procedimiento Nº: TD/00164/2011.

²² Resolución AEPD. Expediente Nº: E/02726/2012. LALEY 2498/2012.

²³ Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad. BORM 25 octubre 2017. LALEY 16958/2017

posibles reuniones con tutores, participación en fiestas y festivales escolares, boletines de notas y calificaciones, sanciones o absentismo escolar²⁴.

III. TRATAMIENTO DE DATOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS

Los centros escolares constituyen una parte importante en la vida de un niño. En ellos pasan una gran parte de su tiempo y empiezan a desarrollarse como personas. De este contacto entre padres o tutores, alumnos y centro escolar se derivan, entre otras cosas, multitud de datos personales que el centro necesita tratar para poder cumplir su función, que no es otra que la de educar y orientar a sus alumnos.

Este tratamiento comienza desde el mismo momento en el que los padres o tutores del menor solicitan al centro una plaza. Continúa con la matriculación, y se mantiene y amplía, con los años, a lo largo de la estancia del niño en la escuela. Además, los centros académicos deben conservar el expediente de sus alumnos una vez que éstos han terminado sus estudios y han dejado el centro, por lo que normalmente los centros mantienen los ficheros con datos de los alumnos durante bastante tiempo²⁵.

A. RECOGIDA DE DATOS POR LOS CENTROS ESCOLARES

Como acabamos de mencionar, el centro escolar necesita los datos de sus alumnos y sus familias para poder realizar sus funciones y, antes que nada, ha de recogerlos. Por tanto, en primer lugar, es necesario determinar qué clase de datos está autorizado el centro a recabar y de qué manera puede hacerlo.

a. Tipos de datos

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece los tipos de datos que pueden recabar los centros docentes y estos datos pueden hacer referencia al origen y ambiente familiar y social del alumno, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultado de su escolarización y a otras circunstancias cuyo conocimiento sea

²⁴ MARTÍN MOLINA, A.A. “Información escolar de los colegios a padres separados”. *LA LEY Derecho de familia*, Nº 17, Primer trimestre de 2018, Editorial Wolters Kluwer. LALEY 1723/2018.

²⁵ Para la confección de este bloque nos hemos servido de la consulta del Informe de la Agencia Española de Protección de Datos: *Guía para Centros Educativos*. “Guías Sectoriales AEPD”. Madrid. 2017

necesario para la educación y orientación del mismo (Disposición Adicional vigesimotercera).

En cuanto a las categorías especialmente protegidas de datos a las que hace referencia el art.7 LOPD, como son aquellos referidos a la ideología, religión o creencias de los alumnos, así como los referentes a su origen racial o salud, podrán ser igualmente recabados y tratados por los centros escolares cuando sean necesarios para el desempeño de la función docente y orientadora, como ocurriría por ejemplo en supuestos en los que el menor debiera escoger cursar o no la asignatura de religión, o informar al servicio de comedor sobre intolerancias o alergias.

Estos datos especialmente protegidos requieren condiciones especiales en relación a cómo se debe prestar el consentimiento, ya que éste debe ser expreso, y en algún caso también escrito. También requieren medidas especiales, tanto técnicas como organizativas, para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. (art.9 LOPD)

Centrándonos en los datos de salud, estos pueden ser recabados en dos momentos: bien a la hora de realizar la matrícula del alumno, en cuyo momento se harán referencia a cuestiones como discapacidades, TDAH, enfermedades crónicas, intolerancias a alimentos o alergias; o bien durante el desarrollo del curso escolar, en los casos en los que el alumno deba recibir algún tratamiento médico, ya sea en la enfermería del centro o en un centro sanitario al cual se le haya trasladado como consecuencia de un accidente o indisposición sufrida en el centro. También se puede incluir en éste apartado los informes de los equipos de orientación psicopedagógica²⁶.

En relación con los datos biométricos²⁷, que han sido incluidos por el RGPD dentro de la categoría especial de datos, se planteó en 2015 una consulta a la AEPD sobre si un sistema de control biométrico, como puede ser la huella dactilar de los alumnos, podría ser utilizado para su acceso al comedor (Informe de la AEPD 0065/2015)²⁸.

²⁶ Informe AEPD 0445/2009. *La realización de test psicotécnicos implica el tratamiento de datos de salud*. Madrid. 2009. LALEY 3566/2009.

²⁷El Reglamento General de Protección de Datos define los *datos biométricos* como datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona. (Art. 4.14).

²⁸ Informe AEPD 0065/2015 *Control de acceso al comedor por huella digital*. Madrid. 2015

El Informe 0065/2015 determina que para que este sistema sea admitido, debe cumplir los supuestos necesarios para que exista proporcionalidad en el tratamiento de los datos. Esto implica idoneidad para el cumplimiento de la finalidad pretendida, que resulte el medio más adecuado para ese fin y que sea el sistema con menos injerencia en el resto de bienes, valores y derechos de los alumnos. Derivado de lo anterior, la AEPD afirma en su Informe que *“un sistema de reconocimiento dactilar sería posible siempre que quedara reducido a determinadas dependencias del centro y permitiera que los medios de verificación, en este caso el algoritmo de la huella dactilar del alumno, permanecieran en su poder y no fueran incorporados al sistema, el cual solo incluiría los datos referentes a la identificación del alumno que accede al comedor, al producirse una verificación positiva del mismo”*.

Los centros escolares también necesitan recabar datos e información sobre la situación familiar y social de los alumnos. En especial si los padres se encuentran separados o divorciados, debe especificarse quién de ellos ostenta la patria potestad y la guardia y custodia, así como las personas autorizadas para recoger al alumno. Los padres deben notificar al centro cualquier cambio que se produzca en relación a esta cuestión, ya que los datos al respecto deben estar actualizados.

Es importante recordar que los datos recabados deben tener siempre un fin educativo y no deben ser excesivos en relación con el mismo (art.4 LOPD).

Sólo como consecuencia de la relación jurídica establecida con la matrícula o si media el consentimiento de los padres o tutores o del propio alumno, podrán recabarse datos con fines distintos al anteriormente citado. En este caso se debe cumplir previamente con el derecho de información al titular de los datos, o a sus padres o tutores si es menor de catorce años.

b. Procedimiento de recogida de datos

Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la información necesaria para poder llevar a cabo la función docente y orientadora (DA23^a LOE). En el caso de que la familia fuera reticente a facilitar algún tipo de información, el centro podría invocar la imposición que en este tema establece la LOE.

Para aquellos datos destinados a esta función, docente y orientadora, no será necesario recabar el consentimiento, pero siempre será necesario informar a los interesados de modo expreso, preciso e inequívoco (art.5.1 de la LOPD).

En el supuesto de que se necesite el consentimiento, es decir, para aquellos datos que no sean parte de la función educativa, éste deberá obtenerse con carácter previo a su recogida y de forma inequívoca.

Para los datos referidos a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias tanto del tanto del menor como de sus padres o tutores, el consentimiento deberá ser prestado de forma expresa y por escrito. Y en relación con los datos relativos al origen racial, salud y vida sexual, el consentimiento de los mismos se prestará de forma expresa (Art.7 LOPD).

Este consentimiento puede, y suele, plasmarse en el mismo impreso o formulario de recogida de datos que se incluye en la formalización de la matrícula del alumno. Bastaría con que se obtuviera una vez, por ejemplo, al comienzo de cada curso, sin que sea necesario recabarlo cada vez que se va a realizar una actividad en el centro.

Los centros escolares facilitan los datos recabados a los profesores para que éstos puedan llevar a cabo la función docente, pero éstos a su vez, pueden recabar directamente otros datos de carácter personal. Siempre en el marco de esta función, pueden recabar datos directamente de los alumnos en el marco de las instrucciones, protocolos o régimen interno que el centro o la Administración educativa haya adoptado y pueden solicitar directamente a los alumnos datos de sus padres en casos necesarios, como puede ser una situación de riesgo.

En casos muy excepcionales, en los que estuviera presente el interés público o se pusiera en riesgo la integridad de un menor, podría el centro educativo, ponderando el caso, acceder al dispositivo móvil de un alumno o a su red social, y recabar datos directamente sin contar con el consentimiento de los padres o del interesado²⁹.

Los profesores pueden crear grupos con aplicaciones de mensajería instantánea con los alumnos o con sus padres de manera excepcional y para situaciones concretas. En ambos casos necesitarían el consentimiento de los padres, y sería conveniente que dichos grupos estuvieran administrados por los padres y no por el propio profesor. A través de estas aplicaciones, los profesores no podrían grabar imágenes a los alumnos y difundirlas a sus

²⁹ SAN 26 de septiembre 2013. LALEY 144527/2013.

padres como parte del ejercicio de la función educativa, pero sí sería posible en casos en los que el interés del menor estuviera comprometido, es decir en caso de accidente o de riesgo, y cuando el objetivo de enviar las mismas fuera tranquilizar e informar a los padres. En todo caso, sería preferible que, con carácter general, las comunicaciones entre profesores y alumnos, o entre profesores y padres, tuviera lugar dentro del ámbito de la función educativa y a través de los medios y herramientas establecidas por el centro escolar.

B. TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS ALUMNOS

En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. (DA 23ª.3 LOE). La incorporación de un alumno a un centro docente supone el consentimiento para el tratamiento de sus datos. (DA 23ª.2 LOE). Esto implica que no será preciso el consentimiento ni del alumno ni de sus padres o tutores para el tratamiento de los datos y, por tanto, no podrán negarse a que los datos sean tratados³⁰.

a. Constitución y declaración de ficheros

Con todos los datos que ha recabado, el centro constituirá un fichero, entendiendo por tal todo conjunto organizado de datos de carácter personal, independientemente de cual sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización o acceso, [art.3.b) LOPD].

Previamente a la creación de este fichero, este hecho deberá ser notificado a la Agencia de Protección de Datos por la persona que pretenda crearlos (el nuevo RGPD suprime la obligación de inscripción de los ficheros de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos). En dicha notificación se deberá indicar la identificación del responsable del fichero, la identificación del propio fichero, sus finalidades y usos previstos, el sistema de tratamiento empleado en su organización, el colectivo de personas sobre el que se obtienen los datos, el procedimiento, procedencia y categoría de los mismos, el nivel de medida de seguridad que posee, las cesiones de datos que se prevean realizar y si se diera el caso, las transferencias internacionales de datos. (Art.55 RLOPD).

³⁰ Informe AEPD 0110/2008. *Tratamiento de datos por centros de enseñanza*. Madrid. 2008. LALEY 243/2009.

Los ficheros más comunes que han de ser registrados para el tratamiento habitual de datos del centro educativo son: 1. Expediente académico, 2. Personal docente, 3. Personal no docente, 4. Servicios complementarios, 5. Proveedores, 6. Admisión de alumnos, 7. Orientación psicopedagógica y 8. Otros en función de los servicios y características del centro, como podría ser videovigilancia o control de presencia por huella digital³¹.

La titularidad de los centros escolares puede ser diversa y, por tanto, la declaración de los ficheros constituidos en cada uno de los tipos de centros se hará de una forma diferente:

- Si nos encontramos ante un centro educativo privado, como persona jurídico-privada que es, deberá notificarlo al Registro General de Protección de Datos mediante el formulario NOTA para ficheros privados.
- Si el centro es concertado, también tiene personalidad jurídica propia, por lo que la gestión para declarar el fichero será la misma que la de un centro privado³².
- Los centros educativos religiosos pertenecientes a una orden, prelatura o institución religiosa no suelen tener personalidad jurídica propia y diferenciada de la misma por lo que la declaración puede ser o centralizada por la institución religiosa o descentralizada por cada uno de los centros.
- Puede ser que el centro educativo esté gestionado por una empresa privada a través de un contrato de gestión de servicios públicos con una Administración. En este caso sus ficheros tendrán también carácter privado, ya que el titular del centro es una persona jurídico-privada y se gestionará igual que los centros privados.
- Por último, si el centro es público, su titularidad puede ser autonómica o municipal. En el caso de que sean de titularidad de la Administración autonómica, habitualmente los ficheros se declaran a través de una Orden de la Consejería de Educación. Si por otro lado depende de la Administración municipal, se declarará a través de una Ordenanza u otra fuente de derecho municipal³³.

³¹ MUÑOZ, J. *Protección de datos en centros educativos públicos y privados*. Disponible en <http://www.joaquinmunoz.com/2009/05/12/proteccion-de-datos-personales-en-centros-educativos-publicos-y-privados/> Ref. 20 de mayo 2018.

³² Informe AEPD 0501/2005. *La naturaleza de los ficheros de un Colegio Privado concertado*. Madrid. 2005.

³³ CAZURRO BARAHONA, V. “Colegios y centros de formación” BIB 2014/8367. *Prácticum Protección de Datos 2015. Grandes Tratados*. Enero de 2014. BIB 2014/3509. ARANZADI, S.A.U

b. Publicación de datos

Los centros escolares, en determinadas situaciones, necesitan dar publicidad a la información recabada a sus alumnos.

Una de estas situaciones se produce con la publicación de las listas de alumnos admitidos en el centro. Al tratarse de una admisión mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, en el cual se valoran diferentes circunstancias, es necesario que se publiquen los datos, con efecto de notificación a los interesados, como establece el art.45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas³⁴. Para poder garantizar los derechos de los interesados, esta publicidad se hará de forma que no suponga un acceso indiscriminado a la información mediante, por ejemplo, listados en el interior del centro o en la página web del mismo a los que sólo podrán acceder aquellos que estén legitimados. Así mismo, la información publicitada no debe ser especialmente sensible o poner de manifiesto la capacidad económica de la familia.

Merecen especial mención las personas en situación de violencia de género. Puede ser que, por desgracia, un alumno del centro o su familia se vea envuelto en esta situación. En este caso, estaría legitimado por el art.6.4 LOPD para oponerse a su tratamiento por motivos fundados o legítimos relativos a su concreta situación personal. El centro escolar deberá ser especialmente cuidadoso con la intimidad de estas personas y, como responsable del fichero, excluirá al afectado de las listas de admitidos o de aquellos listados de datos que fueran necesarios. Este derecho que poseen las víctimas, puede ejercerlo el propio menor si cuenta con más de catorce años. Si no es así, deberán ejercerlo sus padres o tutores legales.

En cualquier caso, la información, incluso la que no sea publicada, estará a disposición para que los interesados puedan ejercer sus derechos sobre los mismos. También con esta finalidad deberá el centro escolar conservar los datos, ya que los listados, una vez que ya no sean necesarios, deberán ser retirados (art.4.5 LOPD).

Otra de las situaciones en las que el centro puede necesitar hacer públicos datos de alumnos es en relación con los beneficiarios de becas, subvenciones y otras ayudas públicas. En este caso, el art.8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,

³⁴ Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE-A-2015-10565

acceso a la información pública y buen gobierno³⁵, establece que deben hacerse públicas, como mínimo, las subvenciones y ayudas públicas concedidas por las Administraciones públicas, indicando su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Los centros escolares, en virtud del apartado 2 del citado art.8.1.c), también deben hacer públicos estos datos con el fin de informar a los interesados.

Al igual que sucedía en el caso de la publicidad del listado de alumnos admitidos, estos listados también serán retirados una vez cumplidos los plazos correspondientes. Así mismo, se debe tener especial cuidado de no reflejar datos sensibles o que puedan afectar a la intimidad de las familias. La AEPD se ha manifestado especialmente en relación con las becas y subvenciones a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. De su Informe 0240/2017 se puede deducir que *“dado que los datos de los interesados en las Ayudas al estudio analizadas son datos de salud, la publicidad activa que habrá que hacer el órgano concedente de dicha información sólo podrá llevarla a cabo de modo que de ninguna manera se pueda identificar a ninguno de los interesados”*. No se podrá por tanto publicar, de conformidad con la ley de transparencia, los nombres y/o apellidos, o el DNI de los estudiantes afectados, ni tampoco a quienes se deniegue por las mismas razones³⁶.

En relación a lo anterior, la AEPD ya condenó al Ministerio de Educación Cultura y Deporte por vulnerar el artículo 4.1 de la LOPD, infracción tipificada como grave en el art.44.3.c) de la misma ley, al publicar en abierto en su página web la resolución de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Se consideró que se daban a conocer datos personales excesivos de menores de edad, al ser posible el libre acceso a la página por cualquier persona³⁷.

En el mismo sentido se expresó la AEPD cuando condenó a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha por la publicación en la página web de la baremación para la concesión de una plaza escolar de un menor incluyendo, en este caso, el dato de minusvalía del padre aportado para dicha baremación. Se alegaba que en la publicación de la Junta también se podían conocer datos de la capacidad económica de la familia. La AEPD resolvió que *“si bien la Consejería de*

³⁵ Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887

³⁶ Informe AEPD 0240/2017. *Datos de becas y ayudas*. Madrid. 2017

³⁷ Resolución: R/03107/2017. Procedimiento N° AP/00016/2017

Educación debe dar cumplimiento a los principios de igualdad, publicidad y transparencia en los procedimientos de concurrencia competitiva, también debe cumplir la normativa de protección de datos. Y ambos principios pueden cumplirse facilitando la información a todos y cada uno de los participantes a través de internet con la clave y contraseña que facilite el acceso a la información, pero solo a los participantes”³⁸.

Es muy habitual, por otra parte, que los centros escolares con fines de organización, coloquen en la entrada del centro, en tabloneros de anuncios o en la entrada de las clases, la relación de alumnos por aulas, actividades y servicios, así como el menú en el comedor del centro.

En el caso de los listados por aulas, son perfectamente legítimos durante un tiempo razonable que permita a los interesados conocer la información, pasado el cual, deberían ser retirados (art.4.5 LOPD). Sí es posible que esa información permanezca a lo largo del curso académico en la plataforma informática del centro a la cual cada alumno y sus padres accederá con su propio usuario y contraseña, impidiendo así que terceros puedan conocer esos datos.

En relación con el comedor del centro, la publicidad del menú es necesaria por la posible existencia de alumnos con necesidades alimentarias especiales, alergias o intolerancias, o por cuestiones religiosas. En este caso el centro sí podrá disponer de información detallada de qué alumnos requieren un menú especial, pero esta información deberá ser exclusiva para el servicio de comedor, no pública.

c. Calificaciones

La evaluación y calificación de los alumnos es algo intrínseco a la función educativa, por lo tanto, es necesario hacer una referencia a su tratamiento, acceso y publicación. Se debe mencionar que, al contrario de lo que ocurre en el ámbito de la educación universitaria, la publicidad de la comunicación de las calificaciones en centros no universitarios no está regulada.

Con carácter general, creemos que lo más adecuado sería comunicar las calificaciones únicamente al alumno y a sus padres y tutores. En el caso de que se hiciera a través de la plataforma del centro, deberá establecerse un sistema en el que solo tengan acceso a las

³⁸ Resolución: R/02316/2016. Procedimiento N° AP/00025/2016

notas el alumno y sus padres mediante clave y usuario personal, de manera que los terceros no puedan acceder a ellas.

Resulta habitual en los centros escolares, sobre todo en caso de controles y exámenes parciales (no a las calificaciones finales), que los profesores comuniquen las notas a los alumnos de forma oral. Sería aceptable este sistema siempre y cuando se abstuvieran de realizar comentarios adicionales que pudieran afectar o llegar a humillar al alumno.

d. Acceso a la información de los alumnos

Los centros escolares acaban recabando gran cantidad de información concerniente a sus alumnos y a las familias de éstos. A estos datos pueden tener acceso los profesores y el resto del personal del centro, siempre y cuando sea para ejercer sus funciones y en este caso quedarán sujetos al deber de sigilo y secreto, (art.10 LOPD y DA23ª.3 LOE). También los padres pueden tener acceso a determinada información de sus hijos que se genera en el centro escolar.

Comenzando con los profesores, éstos deben conocer datos de los alumnos a los que imparten clase, siempre que sean necesarios para impartir sus actividades docentes. Deben tener acceso al expediente académico de sus alumnos, a cierta información relativa a la situación familiar de los niños y a datos de salud que les puedan afectar. Por ejemplo, información sobre si tiene algún tipo de discapacidad, trastorno de atención, TDAH, y también si padece de algún tipo de intolerancia alimentaria o alergia, para poder tener el cuidado adecuado de los alumnos tanto dentro del centro escolar como fuera de él en las actividades y excursiones que se puedan organizar.

Siguiendo con los padres de los alumnos, éstos tienen derecho a acceder a información sobre sus hijos porque son los titulares de la patria potestad del menor, y como tales tienen las funciones de velar por ellos, educarlos y procurarles una formación integral, (art.154 CC)³⁹. Amparados por este derecho/deber, podrán solicitar información sobre las ausencias escolares de sus hijos⁴⁰, así como de la salud de los mismos a los equipos de orientación del centro.

³⁹ Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. BOE-A-1889-4763

⁴⁰ Con respecto al acceso de información sobre los alumnos que tienen los padres de los mismos se puede mencionar que en Castilla y León existe el portal Infoeduc@. Se trata de un servicio que ofrece a las familias la posibilidad de obtener información académica y educativa de sus hijos a través de internet, telefonía y mensajes a móviles. Proporciona información sobre las faltas de asistencia y retrasos, calificaciones, horario

En relación con el acceso de los padres a datos de salud de sus hijos se pueden plantear cuestiones y discrepancias porque se trata de una cesión de datos a terceros (art.11.1 LOPD) y, además de datos especialmente protegidos (art.7.3 LOPD). El art. 11.2 LOPD considera que podrán cederse datos de carácter personal a terceros sin consentimiento del interesado si lo autoriza una ley. El art.7.3, referente a datos especialmente protegidos como son los datos de salud, también permite su cesión si así lo dispone una ley. En este caso, esa “ley” es el Código Civil y, en concreto, su artículo 154 que establece los deberes y facultades que comprende la patria potestad. En relación con esta cuestión la AEPD se ha manifestado en el Informe 0222/2014⁴¹, que reitera lo anteriormente manifestado en el Informe 0114/2008⁴², y que establece que *“disponer de la información sanitaria de los hijos es fundamental para poder velar adecuadamente por la salud de los mismos, por ello, entendemos que el Código Civil habilita la cesión de la información sanitaria a quién ostenta la patria potestad”*.

Se debe precisar, como apunta el Informe 0222/2014, que *“esta habilitación se refiere a los titulares de la patria potestad, no a cualesquiera familiares”*. Los familiares sólo podrán obtener estos datos si ejercen la tutela (el art.269 CC establece una habilitación legal similar para los tutores) o si están debidamente autorizados, constando esa autorización en el centro.

Argumentación similar a la que acabamos de desarrollar ha mantenido la AEPD en relación con la comunicación a los padres de las calificaciones de sus hijos menores de edad. En el Informe 466/2004⁴³ se afirma que *“En consecuencia, con independencia del tipo de Centro Escolar de que se trata (público o privado) y, en su caso, de la existencia de una relación contractual entre dicho Centro y los padres o tutores del menor, la cesión de los datos relativos a las calificaciones académicas de éste, así como la comunicación de cualquier circunstancia relativa a la adaptación o inadaptación del menor al Centro*

del alumno, equipo docente, datos de tutoría e histórico de calificaciones.
<http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/infoeduca>

⁴¹ Informe AEPD 0222/2014. *Menores e historia clínica. Consentimiento y derechos de acceso y oposición*. Madrid. 2014.

⁴² Informe AEPD 0114/2008. *Cesión de datos*. Madrid. 2008.

⁴³ Informe AEPD 0466/2004. *Comunicación a los padres de las calificaciones de sus hijos menores de edad*. Madrid. 2004. También en el mismo sentido, se manifestó posteriormente la AEPD en su Informe 227/2006. *El acceso a datos escolares por padres y familiares*. Madrid. 2006.

Escolar, se encontrará amparada legalmente por los transcritos artículos 154 y 269 del Código Civil”.

Nos podríamos preguntar ahora, ¿qué sucede cuando los hijos cumplen la mayoría de edad y siguen en el centro escolar?, ¿pierden sus padres el derecho a informarse de sus calificaciones o de sus ausencias escolares?

Esta cuestión también la ha abordado la AEPD. En su Informe 0441/2015⁴⁴ determinó que los progenitores tienen un interés legítimo a acceder a las calificaciones escolares de sus hijos mayores de edad, que prevalece sobre su derecho a la intimidad y protección de datos, en aquellos casos en los que son los padres los que sufragan los gastos educativos de esos hijos. Al continuar los padres manteniendo a los hijos, pese a ser mayores de edad, están amparados por la ley para poder acceder legítimamente a esos datos, sin contar con el consentimiento de titular de los mismos.

Por el mismo motivo, en aquellos casos en los que los menores estén emancipados, o teniendo la mayoría de edad, sean ellos mismos los que sufraguen sus gastos escolares, los padres no estarán legitimados para acceder a esta información, generada por el centro escolar, a cerca de sus hijos.

La decisión que ha tomado la AEPD en relación con este tema nos parece acertada, puesto que de alguna manera los padres necesitan saber si el desembolso económico que están haciendo para sufragar los gastos académicos de sus hijos está siendo fructífero y aprovechado por éstos. Por supuesto que se deberá valor el caso concreto, ponderar este derecho con el derecho a la intimidad personal del hijo y el esfuerzo personal realizado por éste, pero se debe evitar que se produzca un aprovechamiento de la capacidad patrimonial de los padres por parte de los hijos, alargando en ocasiones sus estudios sin causa justificada basándose en que pueden permitírselo gracias a sus padres⁴⁵.

⁴⁴Informe AEPD 0441/2015. *Acceso por los padres a las calificaciones escolares de hijos mayores de edad*. Madrid. 2015.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado la Agencia en sus informes jurídicos: Informe 0141/2017. *Interés legítimo y alimentos del hijo*; e Informe AEPD 0178/2014. *Aplicación de la Ley de transparencia*. Casos.

⁴⁵ Para más información sobre el tema se puede consultar: HIDALGO CEREZO, A. “La protección de datos de los menores de edad. Especial referencia a sus excepciones en materia sanitaria y de educación”. *LA LEY Derecho de familia*. Nº 15. Tercer trimestre de 2017. (pp.20-42). LALEY 9926/2017.

e. Comunicación o cesión de los datos de los alumnos

La cesión o comunicación de datos consiste en la revelación de datos realizados a una persona distinta del interesado [art.3.i) LOPD]. Los centros escolares, en el marco de su función educadora, se ven en la obligación o en la necesidad de comunicar datos de sus alumnos a otros centros, administraciones, entidades privadas o instituciones. Esta comunicación se debe hacer siempre buscando un fin directamente relacionado con las funciones legítimas tanto del cedente, en este caso el centro escolar, como el cesionario, Administraciones públicas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Servicios Sociales, etc., y debe contar siempre con el consentimiento del interesado, es decir, del propio alumno, o de sus padres o tutores si cuenta con menos de catorce años (art.11.1 LOPD).

Hay situaciones que no requieren ese consentimiento (art.11.2 de la LOPD): cuando la cesión está autorizada por una ley; cuando se produzca en el marco de una relación jurídica aceptada libremente por ambas partes, por ejemplo, con la matriculación del alumno; cuando la cesión es entre Administraciones Públicas y el objeto de la misma es el tratamiento posterior con fines históricos, estadísticos o científicos; o cuando la cesión es relativa a datos de salud y estos son necesarios para solucionar una urgencia médica o para realizar un estudio epidemiológico.

En cuanto al modo de realizar la cesión de estos datos, establece la LOE que la misma se realizará preferentemente, incluso cuando incluya datos de carácter reservado, por vía telemática (DA23ª.4).

A continuación, nos vamos a referir a la cesión que se puede hacer de datos de alumnos dentro de distintos ámbitos o entidades:

a) Comenzando por el ámbito sanitario, cuando se produzca por ejemplo una intoxicación alimentaria por parte de un alumno o un accidente en el cual resulte herido el menor, podrá el centro escolar comunicar sus datos a los servicios médicos sin contar con su consentimiento, ya que se trata de prestar un servicio de urgencia. Esta situación se puede ampliar a los supuestos en los cuales el tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médico, prestación de asistencia sanitaria o tratamiento médico o gestión de servicios sanitarios. Esto estaría condicionado a que la asistencia y el tratamiento de dichos datos fuera realizada por un profesional sanitario sujetos a secreto profesional o por otra persona sujeta igualmente a una obligación equivalente de secreto (art.7.6 LOPD).

Muchos centros escolares tienen contratado un seguro de responsabilidad civil para poder cubrir los daños que sufran o puedan provocar los alumnos y se produzcan dentro del centro o de las actividades escolares⁴⁶. Cuando se requieran datos médicos de la asistencia médica prestada a un alumno con el objetivo de dar parte al seguro en relación a la misma, el centro educativo podrá solicitar información sobre la asistencia que se ha prestado a ese menor alumno del centro.

Si bien, como se ha comentado antes, en casos en los que se requieran datos de alumnos para realizar estudios epidemiológicos⁴⁷ o cuando sean estrictamente necesarios para garantizar la salud pública y sean solicitados por una administración pública, no se requiere el consentimiento de los interesados; en casos menos extremos como campañas de vacunación o programas de salud escolar sí será necesario que el centro transmita la información a las familias y solicite de ellas el consentimiento.

b) Podemos encontrarnos por otra parte ante situaciones en las cuales exista, o se deba prevenir, un peligro real para la seguridad pública o se deban reprimir infracciones penales. En estos casos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden solicitar datos al centro escolar del alumno (art. 22.2 LOPD). Estos datos se recabarían sin requerir el consentimiento por parte del interesado, pero deben ser peticiones concretas, específicas y motivadas, es decir no pueden realizar una petición indiscriminada de datos abusando de su autoridad. Si los datos que solicitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son datos considerados como especialmente protegidos, solo podrán ser cedidos si son absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta.

c) Debemos considerar también que, por desgracia, hay menores que se encuentran en situaciones de riesgo o desamparo. Debido a la cantidad de tiempo que pasan los menores en los colegios e institutos, y a las relaciones sociales que se desarrollan en él, en muchas ocasiones son estos centros los que detectan estas situaciones y deben avisar a los Servicios Sociales. Estarán obligados a comunicar esta información cuando detecten una posible situación de desprotección o de maltrato del menor; o cuando perciban que el menor no está escolarizado o falta al centro de forma habitual y sin justificación durante

⁴⁶ En base a los art. 1903 y 1904 del Código Civil *Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias.*

⁴⁷ Esta cuestión ha sido especialmente tratada por la AEPD en su Informe Jurídico 0023/2017. *Cesión datos alumnos a Sanidad para estudio epidemiológico*. Madrid. 2017

el periodo obligatorio. Este aviso se debe dar por parte del centro escolar sin que sean las autoridades o los servicios sociales los que la requieran, ya que es una obligación que tiene todo ciudadano (artículo 13.1º y 2º de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en adelante LOPJM⁴⁸).

Cuando sean los Servicios Sociales los que soliciten datos de menores, siempre que sea para la determinación o tratamiento de situaciones de riesgo o desamparo, teniendo en cuenta el interés superior del menor⁴⁹, no requerirán consentimiento de los interesados para poder acceder a dichos datos (art.22 quater.1 LOPJM⁵⁰). Referente a esta cuestión podemos encontrar un Dictamen de la Agencia Vasca de Protección de Datos CN20-016⁵¹, según el cual *“Existe habilitación legal suficiente para que la Administración con competencias en la materia pueda obtener información relativa a aspectos educativos, sin consentimiento del titular de los datos, información proporcionada por titulares de centros educativos y su personal, así como autoridades y personas en general. Este Dictamen destaca que estas cesiones deberán cumplir el principio de calidad de los datos, en el sentido de que solo se pueden tratar datos adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a la finalidad del tratamiento.*

d) Por último, centrándonos en el ámbito escolar en el sentido más estricto, también se dan situaciones en las que los centros educativos deben ceder datos de sus alumnos.

Esto sucede, por ejemplo, en los casos en los que el niño cambia de centro escolar, para los cuales la LOE determina que el centro anterior deberá ceder los datos sin necesidad de contar con el consentimiento del menor o de sus padres o tutores (DA23^a). También

⁴⁸ Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. BOE-A-1996-1069.

⁴⁹ El principio del *interés superior del menor* es un principio esencial que debe presidir toda actuación relacionada con los menores de edad. Podemos encontrarlo tanto en el art.2 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE-A-2015-8222), como en el art.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-1996-1069). Este principio establece que los menores tienen derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado.

⁵⁰ En relación con esta materia, y en concreto con este artículo de la LOPJM, podemos encontrar información más detallada y desarrollada en la ponencia del fiscal Daniel Valpuesta Contreras. VALPUESTA CONTRERAS. D. *El nuevo artículo 22 quater de la Ley de Protección Jurídica del Menor*. 2015. <https://www.fiscal.es>

⁵¹ AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS. CN10-016. *Dictamen que se emite en relación a la consulta planteada por el Ayuntamiento de xxx sobre la adecuación de la normativa de protección de datos de cesiones de datos en materia de servicios sociales*. Vitoria-Gasteiz. 2010.

deberá ceder los datos a la Administración educativa para que ésta pueda ejercer sus competencias.

Si el alumno realiza un intercambio escolar o estancia temporal, ya sea a otro centro nacional o internacional, el colegio deberá proporcionar la información necesaria al centro de destino, en la medida en que éstos la necesitan para cumplir adecuadamente su función educativa. Si se trata de un centro fuera del Espacio Económico Europeo (Estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega) se tratará de una transferencia internacional de datos.

Para finalizar, en los casos en los que los menores realicen actividades extraescolares (en las cuales realicen visitas a teatros, museos, fábricas, parques, etc.), siempre que se cuente con la autorización previa e inequívoca de los padres o tutores de los mismos, se podrá ceder datos de esos alumnos a las empresas o instituciones que regenten los correspondientes establecimientos. Por lo tanto, junto con la autorización que se dan los padres de los alumnos otorgando su consentimiento para que el menor pueda asistir a dicha actividad, deberá incluirse otra para que presten también su consentimiento a que los datos de sus hijos sean cedidos a dichas entidades. Se debe recalcar que los datos cedidos solo pueden ser utilizados para fines propios de la actividad a la que acuden los alumnos.

C. TRATAMIENTO DE DATOS EN INTERNET

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, y la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa⁵² recogen en su articulado la necesidad de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto en el aula como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje, como en la organización y dirección de los Centros.

Estas tecnologías han evolucionado hacia una nueva forma de prestación de servicios denominada *Cloud Computing* o Computación en la Nube. Se trata de un modelo que posibilita el acceso desde cualquier equipo o dispositivo electrónico y desde cualquier lugar, a un conjunto compartido de recursos entre los cuales se encuentra el

⁵² Ley Orgánica 8/2013, de 28 de noviembre, para la mejora de la calidad educativa. BOE-A-2013-12886

almacenamiento de datos. Estos datos se encuentran en el proveedor de servicios de la nube al cual se accede a través de internet y puede estar en cualquier lugar del mundo.

Esta materia ha sido tratada y desarrollada por la Agencia Española de Protección de Datos en su Informe de 2015 “*Inspección sectorial de oficio sobre servicios de Cloud Computing en el sector educativo*”⁵³, al que nos vamos a referir en los siguientes apartados.

a. Utilización de Plataformas Educativas

La utilización de recursos informáticos tanto para la gestión de los centros educativos como para el aprendizaje ha supuesto la aparición en el mercado de las *Plataformas de Gestión Educativa* y las *Plataformas de Aprendizaje*⁵⁴ o, en ocasiones, de plataformas que ofertan ambas funciones simultáneamente. Estas plataformas son las encargadas de gestionar los datos de los centros.

En el caso de las Plataformas de Gestión Educativa, el tratamiento de datos por las mismas incluye los siguientes aspectos: almacenamiento de datos identificativos de todos los integrantes del Sistema Educativo (alumnos, padres, tutores, profesores, empleados del Centro, etc.); gestión académica, lo que implica el seguimiento del alumno desde el proceso de prescripción y matriculación, listas de clase y evaluación; tratamiento de complementos relacionados con el transporte, comedor, incidencias de comportamiento de los alumnos (conducta y absentismo), calendarios y reuniones con padres; almacenamiento de datos médicos y psicopedagógicos; gestión económica y administrativa en la que se incluyen datos de facturación y de las actividades extraeducativas, así como datos bancarios; comunicaciones entre el centro educativo y los alumnos y sus familias al proporcionar herramientas de conectividad entre todos los integrantes del sistema; genera informes y listados para las Administraciones Públicas y sirven como pasarelas a otras plataformas.

Por su parte, las Plataformas de Aprendizaje tienen como objetivo la creación de un entorno de trabajo colaborativo entre profesores y alumnos para facilitar la gestión de cursos virtuales. Están compuestas de diferentes aplicaciones informáticas para *Entornos*

⁵³ Informe AEPD. *Inspección sectorial de oficio sobre servicios de Cloud Computing en el sector educativo*. 2015.

⁵⁴ Las *Plataformas de Gestión Educativa* ponen a disposición de los Centros educativos funcionalidades de gestión y de comunicación entre sus integrantes, recabando gran cantidad de datos. Por su parte, las *Plataformas de Aprendizaje*, ponen a disposición de los profesores y alumnos diferentes funcionalidades que favorecen el aprendizaje.

Virtuales de Aprendizaje, como pueden ser las Aulas Virtuales, plataformas Moodle, libros electrónicos o mediatecas.

En estas Plataformas acaban recogidos multitud de datos de alumnos, de sus familias y de los miembros del centro académico, entre los cuales también se pueden encontrar imágenes y vídeos. El centro es el responsable del fichero de los datos, decide sobre su tratamiento y es el encargado de suscribir el contrato de prestación de servicios con las empresas titulares de las plataformas educativas.

Los centros también pueden prestar servicios de adquisición de libros digitales de forma centralizada y para ello, en ocasiones, necesitan remitir la relación de alumnos con sus datos personales a las editoriales. En este caso deberán informar a los interesados de dicha comunicación de datos y de las finalidades de ésta cesión.

Las editoriales, por su parte, también ofrecen plataformas con acceso a libros y contenidos adicionales, así como el acceso a sus libros electrónicos desde otras plataformas. Son ellas las que actúan como responsables del fichero y del tratamiento de los datos cedidos por sus clientes. En este caso, estas editoriales y librerías únicamente mantienen información sobre la licencia de producto en la cual no constan datos personales, y es el denominado *Punto Neutro* (recurso educativo que actúa como interconexión entre Consejerías de Educación, plataformas educativas, editoriales, librerías, colegios, alumnos y padres) el que gestiona las credenciales de los alumnos y profesores, permitiendo que accedan a contenidos digitales de las editoriales sin que éstas conozcan la identidad de los alumnos.

Aunque los centros educativos están legitimados por la legislación estatal y autonómica para el tratamiento de estos datos personales para el desarrollo de su actividad, hay determinadas actividades que requerirán que el interesado, o sus padres o tutores si es menor de catorce años, presten su consentimiento sin que pueda el centro escolar consentir en su nombre:

- Cuando se creen y se difundan contenidos de acceso público que contengan datos personales tales como fotografías, vídeos o grabaciones de voz.
- Los usuarios de sistemas de correo interno deben consentir en que sus datos sean visualizados por otros usuarios, de lo cual el centro debe asegurarse.
- Cuando las empresas encargadas del tratamiento de los datos quieran remitir comunicaciones comerciales a los usuarios del centro. En el caso de que se realice a través de medios electrónicos, éste deberá ser expreso.

Al margen de estas plataformas educativas, los centros escolares pueden usar otras herramientas de almacenamiento en la nube y los profesores de los mismos pueden utilizar aplicaciones en dispositivos personales como tabletas o teléfonos móviles. Esto solo será posible si reúnen las garantías previstas en la normativa de protección de datos.

Como ya hemos comentado, el centro académico suscribe un contrato con éstas plataformas mediante el cual da acceso a las mismas a datos de terceros. Este contrato debe constar por escrito o de cualquier otra forma que permita acreditar su celebración o contenido, la finalidad del tratamiento de los datos y debe hacer referencias a los art.9 y 12 de la LOPD. Al poder situarse las plataformas en cualquier lugar del mundo, el centro deberá informarse de la ubicación de los datos y asegurarse que éstos se encuentran en Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo, en un país o territorio considerado como de nivel adecuado de protección o que las garantías se establezcan en cláusulas contractuales adaptadas por la Comisión Europea o por la AEPD.

En el contrato se deberá especificar la naturaleza de los datos para poder ajustar las medidas de seguridad adecuadas. Las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de los datos de carácter personal se recogen en el Título VIII del RLOPD y se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto (art.80 RLOPD). Éstas medidas de seguridad tienen carácter cumulativo y no varían aunque se acceda a los datos a través de redes de comunicación (art.85 RLOPD). Se requerirá un nivel medio en el caso de datos que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento y un nivel de seguridad alto si se trata de datos especialmente protegidos, los cuales, al ser transmitidos por redes públicas o redes inalámbricas de comunicación electrónica, serán cifrados o tratados con cualquier otro mecanismo que garantice que la información no será legible ni manipulada por terceros (art.104 RLOPD)⁵⁵.

El centro debe conocer, y las plataformas deberán facilitarle la información necesaria, el procedimiento establecido para poder recuperar los datos si fuera necesario o una vez finalizado el contrato. El encargado del tratamiento de los datos (plataformas) debe garantizar al responsable del fichero (centros escolares) que ha realizado un borrado seguro de los datos que tenía, de forma que no sea posible su reutilización, y que ha bloqueado o borrado a todos los usuarios de las mismas, de forma que les sea imposible

⁵⁵ CAZURRO BARAHONA, V. “Colegios y centros de formación” BIB 2014/8367. *Prácticum Protección de Datos 2015. Grandes Tratados*. Enero de 2014. BIB 2014/3509. ARANZADI, S.A.U.

volver a acceder a la plataforma educativa. Esta actuación se asegura mediante un certificado de destrucción o un acuse de recibo.

b. Publicación de datos en la web de los centros

Cada vez es más habitual que los centros escolares cuenten con página web. Sirven para dar publicidad sobre el centro y para informar de los servicios que ofrecen, de las actividades que realizan y de la estructura y organización del centro. Por ello no resulta raro que en ellas podamos encontrar información de carácter personal tanto del personal del centro como de los alumnos del mismo.

En primer lugar, en relación con los profesores del mismo, la AEPD emitió un Informe, el Informe 0223/2011⁵⁶ relativo a profesores de Universidad, que consideramos que podemos extrapolar a profesores de centros docentes y de formación. En el citado Informe se establecía *que, si los datos identificativos de los profesores aparecen exclusivamente vinculados a su actividad, y siempre que dicho tratamiento se limite a los datos de los afectados en su mera condición de cargos, administradores o representantes de una empresa o profesores, cabría considerar que estos datos estarían excluidos del marco de aplicación de la LOPD (art.2.2 RLOPD)*. Por lo tanto, si aparecen datos como el nombre, apellido, funciones o puesto desempeñado, dirección postal o electrónica, teléfono o número fax, siempre y cuando éstos sean profesionales, no personales, estos datos no se considerarán dentro de la aplicación de la LOPD y, por tanto, no requerirán del consentimiento del profesor para aparecer en la web del centro.

Cosa distinta sucedería si lo publicado en la web del centro fueran datos que no entran dentro de la categoría anterior. En este caso, si la web es abierta se debería contar con el consentimiento del profesor, ya que cualquiera podría acceder a esta información y no es necesaria para el ejercicio de su función educativa. En el supuesto de que la información de la web estuviera restringida a alumnos y padres del centro, se debería informar al profesor de la publicación en la misma de estos datos.

En segundo lugar, refiriéndonos a los alumnos, se puede publicar información de los mismos en la página web o en un blog del centro, siempre que se cuente con el consentimiento del interesado o de sus padres o tutores. Podrán publicarse imágenes sin

⁵⁶ Informe AEPD 023/2011. *Publicación en páginas web de Universidad de datos de contacto de sus profesores*. Madrid. 2011.

consentimiento si éstas se encuentran disociadas o pixeladas, impidiendo reconocer a los menores.

Si la publicación de la información tiene el objetivo de que los padres de los menores puedan acceder a ella para que puedan ver las actividades que realizan sus hijos, debe hacerse de forma que para acceder a ella se deban identificar y puedan acceder solo a información de los eventos en los que ese concreto menor haya participado. Se debe advertir a los padres que, aunque tengan acceso a esta información, no podrán difundirla abiertamente por otros medios, y en el caso de hacerlo, serán ellos los responsables.

Se dan también situaciones, en las que los padres de los alumnos no quieren que sus hijos aparezcan en la página web y solicitan que, en el caso de que éstas sean publicadas, sean retiradas por el centro. La AEPD se pronunció sobre esta cuestión en el Informe 194/2009⁵⁷, relativo a un caso en el que se habían publicado de forma no consentida en la página web del centro, fotos de una alumna con motivo de la realización de diversas actividades extraescolares. Declara la AEPD que cuando se tratan y ceden datos sin el pertinente consentimiento, el interesado o su representante, podrá ejercer su derecho a la cancelación de los datos del art. 16 LOPD y solicitar por tanto que esta información sea retirada de la página web del centro. Menciona también este Informe el Dictamen 2/2009 del Grupo de Trabajo del artículo 29 sobre la protección de los datos personales de los niños con especial referencia a las escuelas⁵⁸. Recuerda este Dictamen que *las escuelas deben ser conscientes de que la difusión de información personal exige un cumplimiento más estricto de los principios fundamentales de protección de datos. Además, recomienda la aplicación de sistemas de acceso limitado para proteger la información personal, por ejemplo, mediante la identificación de usuario y código.*

c. Publicación de datos en redes sociales

Al igual que sucede con las páginas web y los blogs, cada vez son más los centros escolares que cuentan con redes sociales para difundir información sobre el centro y para permitir que los padres de los alumnos estén informados de las actividades que realizan sus hijos. En este ámbito se ha de tener especial cuidado al publicar fotos de los alumnos

⁵⁷ Informe AEPD 0194/2009. *Fotos de menor publicadas en página web del colegio*. Madrid. 2009.

⁵⁸ GRUPO <<PROTECCIÓN DE DATOS>> DEL ARTÍCULO 29. *Dictamen 2/2009 sobre la protección de los datos personales de los niños (Directrices generales y especial referencia a las escuelas)*. 398/09/ES. WP 160. 2009.

en redes sociales ya que, una vez subidas, el control sobre ellas es mucho más complicado de mantener.

Para poder publicarlas en estos medios se exige el consentimiento inequívoco de los interesados y, antes de recabar el mismo, se deberá informar de manera clara de cuáles son los datos que se van a publicar, en qué concretas redes sociales, con qué finalidad y quién va a poder tener acceso a esa red y en concreto a esos datos. Todo esto se suele especificar, y aparece expresamente, en el documento por el cual se solicita el consentimiento de los padres para poder publicar datos de alumnos, y que suele presentarse con la matrícula. Además, el RGPD incluye la obligación de informar sobre el plazo durante el cual se conservarán estas imágenes y datos, o, si no es posible, los criterios para determinar dicho plazo [Art. 13.2.a) RGPD]. También se recomienda que las redes sociales del centro sean privadas, y que por tanto se requiera aceptar las “solicitudes de amistad” para poder acceder a las mismas, permitiendo así tener un cierto control sobre quién accede a la información que en ellas se cuelga.

D. TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS

Debido a las tecnologías de la información y comunicación, y especialmente a los teléfonos móviles, actualmente resulta excesivamente sencillo la captación, grabación o reproducción de imágenes o fotografías y, por tanto, es necesario y conveniente recopilar y ampliar la información relativa a quién y cómo puede captar esas imágenes, con qué finalidad y a quién las puede transmitir.

Con respecto a quién puede grabar las imágenes podemos diferenciar entre si es el propio centro escolar, los padres o terceros. En cuanto al centro escolar, debemos diferenciar si la grabación de imágenes tiene fines educativos o no. En el primero de los casos no será necesario que el centro recabe el consentimiento de los interesados para captar imágenes de sus alumnos (entre estas imágenes podemos incluir aquellas que forman parte del expediente del alumno con el objetivo de identificarlo).

Los profesores del centro podrán realizar actividades que conlleven la grabación de vídeos o imágenes de los alumnos siempre que entre dentro de la función educativa, y que sólo los alumnos involucrados en la actividad, en ciertos casos también sus padres, y el propio profesor, sean los únicos que puedan acceder a las mismas. Apoyando esta idea

contamos con una Resolución de 2010⁵⁹ de la AEPD relativa a un caso en que el padre de una alumna había denunciado al profesor de inglés por haber tomado fotografías de la menor sin su consentimiento. La AEPD consideró que el profesor realizó las fotografías con una finalidad exclusivamente didáctica, para que el alumnado adquiriese conciencia de la importancia de las TIC,s. Además, las fotografías se encontraban en el ordenador de la sala de profesores del centro y solo tuvieron acceso a ellas los alumnos que realizaron la actividad. Concluyó la AEPD que existía una habilitación para el tratamiento de datos de los menores sin contar con el consentimiento de ellos o de sus padres ya que la imagen era necesaria para el ejercicio de la función educativa, efectuada por una administración pública en el ejercicio de sus competencias.

En el supuesto en el que el profesor sea negligente en relación a este tema, será el centro o la Administración educativa los que respondan, aunque podrán repetir contra el profesor (Art.1903 y 1904 CC).

Por el contrario, si nos encontramos ante otro tipo de fines; por ejemplo, la grabación de imágenes como consecuencia de eventos y actividades que realice el centro con el objetivo de difundirlos en la revista o en la web del mismo, promocionar al centro o que los padres de los alumnos puedan tener acceso a las actividades que realizan sus hijos; en este caso será necesario contar con el consentimiento de los interesados. Previamente al consentimiento, se deberá informar de la finalidad de la grabación y si el acceso a las mismas va a ser libre o limitado. Se recomienda que el acceso a las imágenes sea siempre limitado y controlado, en un entorno seguro que requiera de la identificación del alumno o sus padres para poder acceder a ellas.

Se ha de tener en cuenta que la autorización prestada por los padres no es perpetua y, por consiguiente, en cualquier momento pueden oponerse a que su hijo sea fotografiado, ya sea por el centro o por terceras personas, incluyendo padres de otros alumnos. A partir de ese momento no se podrán tomar fotografías del menor ni difundirlas. Podrán también los padres ejercer su derecho de cancelación de datos de carácter personal ante el centro escolar con el objetivo de que éste elimine las imágenes del menor⁶⁰. Este derecho de rectificación y cancelación se recoge en el art. 16 LOPD y debe hacerse efectivo por el

⁵⁹ Resolución de archivo de actuaciones AEPD. Expediente N°: E/00153/2010 de 14 de mayo de 2010. LALEY 1470/2010.

⁶⁰ En relación con este tema, volvemos a hacer referencia al Informe AEPD 194/2009. *Fotos de menor publicadas en página web del colegio*. Madrid. 2009.

responsable del tratamiento, es decir, por el centro escolar en un plazo máximo de 10 días, de no ser así, el afectado podrá buscar la protección de la AEPD (art.18.2 LOPD).

Podemos encontrarnos, por otra parte, que es un tercero quien toma las fotografías o graba los videos, por ejemplo en el supuesto de una empresa que preste un servicio, miembros de la prensa que quieran cubrir una determinada noticia en el centro escolar (fiestas de navidad o carnavales), o si los escolares acuden a una determinada actividad extraescolar como el teatro o un museo y los titulares de los mismos solicitan una instantánea de dicha actividad. Deberán en este caso contar con el previo consentimiento de los interesados, el cual puede haber sido recabado por el centro y, por supuesto, deberán informar al centro de que van a realizar dichas fotografías o vídeos, nunca realizarlas sin previo aviso o sin que el profesor a cargo de dicha actividad se dé cuenta.

En un tercer y último supuesto, son los padres de los alumnos los que toman las fotografías de los mismos. Con ocasión de los distintos eventos que realiza el centro, actividades tanto escolares como extraescolares, fiestas o eventos deportivos, son muchos los padres que acuden a ver a sus hijos y que además toman fotografías tanto de ellos como de los demás compañeros. En este caso, esta actividad estaría excluida del ámbito de aplicación de la LOPD, ya que se trata de una actividad exclusivamente personal o doméstica [art.2.2.a) LOPD].

El centro deberá tener un criterio claro e informar a los padres sobre si permite o no tomar fotografías y vídeos en este tipo de situaciones, bien cuando se anuncia el evento en una nota informativa o bien en el mismo lugar de celebración mediante carteles o recordatorios.

Si posteriormente los padres procedieran a difundir esas imágenes fuera de este ámbito privado, familiar o de amistad, por ejemplo, en el caso de que subieran a sus perfiles privados las fotografías o vídeos, asumirían la responsabilidad de las mismas, y es importante que el centro también advierta de ello a las familias. Si son fotografías o videos en los que aparecen sus hijos junto con otros compañeros, serán responsables por comunicar imágenes a terceros siempre que no hayan pedido el consentimiento previo a los interesados (los menores que aparecen en la imagen o sus padres o tutores). Si son imágenes en las que exclusivamente aparece su hijo, ellos mismos, como titulares de la patria potestad, son los responsables de prestar el consentimiento para poder difundirlas mientras éste sea menor de edad, aunque sería conveniente que tuvieran en cuenta que el

menor no ha dado su opinión madura y responsable sobre si estaba de acuerdo o no a que sus padres publicaran su vida en internet. Deben reflexionar sobre el hecho de que están creando una huella digital de sus hijos desde edades muy tempranas que posteriormente será muy complicado, por no decir imposible, borrar y que esto puede tener repercusiones en sus vidas futuras.

E. VIDEOVIGILANCIA

Cada vez es más habitual que los centros escolares instalen sistemas de videovigilancia con el fin de garantizar la seguridad tanto de las personas como del propio centro, controlar casos de violencia, acoso escolar y actos vandálicos como robos o daños materiales.

La videovigilancia permite la grabación, captación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes a través de cámaras o videocámaras. Esta información constituye un dato personal a efectos de la aplicación de la LOPD cuando su uso afecta personas identificadas o identificables. Se considerará identificable a una persona cuando su identidad pueda determinarse sin que se requieran plazos o actividades desproporcionadas [art.1.1 de la Instrucción 1/2006 sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de cámaras o videocámaras⁶¹ (en adelante, Instrucción 1/2006)]. Se excluyen de este apartado y de ésta regulación el tratamiento de aquellas imágenes realizadas por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar, dentro de su ámbito personal y doméstico (art.1.3 Instrucción 1/2006).

Lo primero que nos tenemos que cuestionar es si la implantación de un sistema de grabación audiovisual en un centro escolar resulta legítimo y amparado dentro de la regulación de la LOPD. Para resolver esta cuestión contamos con el Informe de la AEPD 0475/2014⁶². Se establece en este Informe que el interés superior del menor, manifestado en la mayor protección tanto física como psicológica de los menores a través de éstos sistemas de vigilancia, permite la implantación de los mismos, siempre y cuando estos

⁶¹ Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el mantenimiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. BOE-A-2006-21648.

⁶² Informe AEPD 0475/2014. *Sistema de videovigilancia en guardería para control laboral*. Madrid. 2014.

sistemas respeten el resto de derechos fundamentales y concretamente en este caso el derecho a la protección de datos personales. La instalación de cámaras de videovigilancia será una medida proporcional y justificada siempre que se trata de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto; que no exista otra medida más moderada para conseguir el propósito con la misma eficacia y que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto⁶³.

Sólo se permitirá la captación y reproducción de imágenes estrictamente necesarias para el cumplimiento de los fines propuestos. Por tanto, se podrán utilizar en el patio o en el comedor del centro, no en lugares como las aulas, ya que en este caso se estaría haciendo un control laboral permanente de los profesores. En el Informe 0475/2014 la AEPD también ha estudiado la cuestión de si se admite el tratamiento de imágenes de los trabajadores con fines de control laboral. Ha establecido que el art.20.3 del Estatuto de los Trabajadores⁶⁴ admite esta medida con carácter general, siempre que cumpla con los requisitos de la LOPD entre los que se incluyen el deber de información a los trabajadores y sus representantes. Sin embargo, añade al AEPD que, aunque la finalidad esté legitimada, será necesario aplicar el principio de proporcionalidad antes de implantar esta medida. En nuestro caso, el control mediante videovigilancia del personal docente del centro resulta desproporcionada ya que se trata de un seguimiento continuo y permanente, sin una causa concreta, que supone una verdadera monitorización de los trabajadores. Por lo tanto, sólo estará permitido instalar cámaras en las aulas si éstas se activan únicamente en horario no lectivo cuando las aulas se encuentren desocupadas, o en circunstancias excepcionales, justificadas por la presencia de un riesgo objetivo y previsible para la seguridad de los menores.

No podrán instalarse cámaras en espacios protegidos por el derecho a la intimidad como son baños, vestuarios o aquellos en los que se desarrollen actividades cuya captación pueda afectar a la imagen o la vida privada como los gimnasios. Ni será admisible la

⁶³ Requisitos o condiciones del juicio de proporcionalidad establecido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 207/1996, de 16 de diciembre.

⁶⁴ Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE-A-2015-11430.

captación de imágenes con fines de control de la asistencia escolar por existir medios menos invasivos, como el método tradicional de pasar lista⁶⁵.

En relación con la orientación de las cámaras, según establece el Informe 0475/2014, en ningún caso pueden captar la vía pública ni captar lugares en los que no se encuentren menores, puesto que no servirían entonces a la finalidad prevista. Además, la captación de imágenes de la vía pública corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de conformidad con la Ley Orgánica 4/1997⁶⁶.

En relación al acceso a las imágenes el citado Informe 0475/2014 señala que deben imponerse medidas estrictas tanto en el visionado inicial como en el posible acceso a las grabaciones. Las pantallas de visionado no podrán estar en lugares de acceso general, sino en lugares donde solo puedan acceder quienes puedan ver las imágenes. Solo el director del centro, o una persona específicamente designada o encargada para ello, tendrá permitido tanto el visionado inicial como el acceso posterior a las imágenes grabadas, por lo que las imágenes nunca serán de acceso general para el personal del centro. También se aconseja implantar controles de seguridad rigurosos.

En cuanto al periodo de tiempo de conservación de las imágenes, la Instrucción 1/2006 establece en su artículo 6 un plazo máximo de un mes desde su captación, pero el Informe 0475/2014 recomienda establecer un plazo más breve de tiempo, en concreto 10 días, transcurrido el cual sólo podrán conservarse las imágenes que revelan algún tipo de hecho trascendente en relación con el interés superior del menor.

Se establece en el artículo 3 de la Instrucción 1/2006 que se debe informar de la existencia de un sistema de videovigilancia. Se debe colocar en la zona, tanto si es un espacio abierto como cerrado, distintivos en un lugar suficientemente visible y, además, se debe tener a disposición de los interesados impresos en los que se detalle la normativa.

Todo lo referido hasta ahora concierne al uso de cámaras de videovigilancia en entornos escolares con fines de seguridad, pero podemos encontrar situaciones en las que la finalidad sea otra. Por ejemplo, cada vez es más habitual que en guarderías o centros de

⁶⁵ Informe de la Agencia Española de Protección de Datos. *Guía de Videovigilancia*. Madrid. 2009. (pp. 25-26)

⁶⁶ Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. BOE-A-1997-17574. Sobre esta cuestión, se puede encontrar más información en la Resolución de la AEPD R/00037/2015. Procedimiento N° AP/00046/2014, de 29 de enero de 2015, fundamento de derecho V.

educación infantil, los padres tengan acceso a imágenes de clases y espacios de juegos en los que participan sus hijos.

En este supuesto se deberán respetar los principios generales de la LOPD, otorgar el consentimiento conforme al art.13 RLOPD (al ser datos de menores de edad), definir la finalidad de la captación de las imágenes y garantizarse la seguridad y el secreto de la información. En el caso de que se facilite el acceso colectivo, por ejemplo a todos los padres de un aula, se deberá controlar el mismo de forma que solo puedan acceder a los datos de la clase de su hijo⁶⁷.

Junto con el consentimiento para el tratamiento de datos de los menores se deberá solicitar el mismo a los profesores y personal que preste servicios profesionales del centro⁶⁸.

IV. CONCLUSIONES

PRIMERA. Los centros escolares, en el ejercicio de su función educativa y orientadora, están legitimados para adquirir y tratar datos de sus alumnos y de su entorno más cercano. Cuando la actividad realizada se encuadre dentro de esta función, no será necesario que obtengan el consentimiento previo de los interesados para proceder al tratamiento de los datos, pero siempre será necesario cumplir con el deber de información a los mismos. Cuando dicho consentimiento sea imprescindible, éste podrá ser prestado por los propios menores si cuentan con más de catorce años, o por sus padres o tutores. Si el consentimiento es prestado por éstos últimos, ambos progenitores deben otorgarlo, incluso en situaciones de crisis matrimonial, ya que ambos son titulares de la patria potestad.

SEGUNDA. Los centros deben ser especialmente respetuosos con los datos de carácter personal que obtienen de sus alumnos, y guardar un recelo meticuloso con la normativa de protección de datos. Como hemos indicado a lo largo del texto, el derecho a la protección de datos se encuentra regulado a nivel estatal en la LOPD y su Reglamento

⁶⁷ Informe de la Agencia Española de Protección de Datos. *Guía de Videovigilancia*. Madrid. 2009. (pp. 37-38)

⁶⁸ Informe 0274/2009. *Cámaras de vídeo instaladas en guarderías*. Madrid. 2009.

de desarrollo, y a nivel comunitario en el RGPD; pero es la AEPD, a través de sus numerosos informes y resoluciones la que ha ido consolidando y concretando la aplicación de éste derecho de protección de datos al ámbito educativo y concretamente a los centros escolares, resolviendo todas las cuestiones que se plantean al respecto.

TERCERA. Hemos podido comprobar que se trata de una materia extremadamente controlada y que se debe seguir con precisión puesto que estamos tratando con datos e información personal de menores y sus familias. Quizá hace unos años, el acceso a esta información personal o familiar pudiera ser más complicado pero, sobre todo con la llega de las nuevas tecnologías, resulta relativamente sencillo, con solo un “clic”, acceder a toda la vida privada de una persona. Por lo tanto, resulta imprescindible que tanto los centros educativos como los propios alumnos o sus familias, sean especialmente cuidadosos y conscientes de la información que facilitan, que cuelgan o comparten en Internet o redes sociales.

CUARTA. A día de hoy resulta inviable para los centros escolares no formar parte de la red informática, no tener todos los sistemas informatizados, o compartir las actividades del centro a través de las redes sociales, puesto que el no hacerlo supone un atraso con respecto al resto de organismos y al de la sociedad en general. Pero esa ventaja adquirida gracias a la facilidad de uso y comunicación que da Internet y los sistemas informáticos, se cobra por otra parte el hecho de que todas estas actividades tengan que estar extremadamente controladas y reguladas, para evitar que se menoscaben los derechos de protección de datos o intimidad, lo cual, en ocasiones, hace que las relaciones personales puedan llegar a perder naturalidad y cercanía.

QUINTA. Nos encontramos por tanto y finalmente, ante una materia propensa al cambio y a la actualización, que debe hacer juicios de ponderación constantes entre los diferentes derechos de las partes, para poder asegurar que todos ellos estén asegurados y garantizados.

IV. BIBLIOGRAFÍA

A. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS DE REVISTA

- ANDREU MARTÍNEZ, B. *La protección de datos personales de los menores de edad*. Aranzadi. Navarra. 2013
- CAMPO IZQUIERDO, A.L. “El divorcio en la escuela”. *Revista de Derecho de Familia* num.54/2012 parte Tribuna Abierta. 2012. BIB 2013/14877 ARANZADI. S.A.U., Cizur Menor.
- CAZURRO BARAHONA, V. “Colegios y centros de formación” BIB 2014/8367. *Prácticum Protección de Datos 2015. Grandes Tratados*. Enero de 2014. BIB 2014/3509. ARANZADI, S.A.U
- HIDALGO CEREZO, A. “La protección de datos de los menores de edad. Especial referencia a sus excepciones en materia sanitaria y de educación”. *LA LEY Derecho de familia*. Nº 15. Tercer trimestre de 2017. LALEY 9926/2017.
- MARTÍN MOLINA, A.A. “Información escolar de los colegios a padres separados”. *LA LEY Derecho de familia*, Nº 17, Primer trimestre de 2018, Editorial Wolters Kluwer. LALEY 1723/2018.

B. INFORMES JURÍDICOS

- Informe AEPD 143/2004. *Responsable del fichero en la enseñanza pública*. Madrid. 2004.
- Informe AEPD 466/2004. *Comunicación a los padres de las calificaciones de sus hijos menores de edad*. Madrid. 2004.
- Informe AEPD 0501/2005. *La naturaleza de los ficheros de un Colegio Privado concertado*. Madrid. 2005.
- Informe AEPD 227/2006. *El acceso a datos escolares por padres y familiares*. Madrid. 2006.
- Informe AEPD 0114/2008. *Cesión de datos*. Madrid. 2008.
- Informe AEPD 0110/2008. *Tratamiento de datos por centros de enseñanza*. Madrid. 2008. LALEY 243/2009.
- Informe de la Agencia Española de Protección de Datos. *Guía de Videovigilancia*. Madrid. 2009.

- Informe AEPD 0194/2009. *Fotos de menor publicadas en página web del colegio*. Madrid. 2009.
- Informe 0274/2009. *Cámaras de vídeo instaladas en guarderías*. Madrid. 2009
- Informe AEPD 0445/2009. *La realización de test psicotécnicos implica el tratamiento de datos de salud*. Madrid. 2009. LALEY 3566/2009.
- GRUPO <<PROTECCIÓN DE DATOS>> DEL ARTÍCULO 29. *Dictamen 2/2009 sobre la protección de los datos personales de los niños (Directrices generales y especial referencia a las escuelas)*. 398/09/ES. WP 160. 2009.
- AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS. CN10-016. *Dictamen que se emite en relación a la consulta planteada por el Ayuntamiento de xxx sobre la adecuación de la normativa de protección de datos de cesiones de datos en materia de servicios sociales*. Vitoria-Gasteiz. 2010.
- Informe AEPD 023/2011. *Publicación en páginas web de Universidad de datos de contacto de sus profesores*. Madrid. 2011
- Informe AEPD 0178/2014. *Aplicación de la Ley de transparencia. Casos*. Madrid. 2014
- Informe AEPD 0222/2014. *Menores e historia clínica. Consentimiento y derechos de acceso y oposición*. Madrid. 2014.
- Informe AEPD 0475/2014. *Sistema de videovigilancia en guardería para control laboral*. Madrid. 2014.
- Informe AEPD. *Inspección sectorial de oficio sobre servicios de Cloud Computing en el sector educativo*. 2015.
- Informe AEPD 0065/2015 *Control de acceso al comedor por huella digital*. Madrid. 2015
- Informe AEPD 0441/2015. *Acceso por los padres a las calificaciones escolares de hijos mayores de edad*. Madrid. 2015.
- Informe AEPD 0023/2017. *Cesión datos alumnos a Sanidad para estudio epidemiológico*. Madrid. 2017
- Informe 0141/2017. *Interés legítimo y alimentos del hijo*. Madrid. 2017
- Informe AEPD 0240/2017. *Datos de becas y ayudas*. Madrid. 2017
- Informe de la Agencia Española de Protección de Datos: *Guía para Centros Educativos*. “Guías Sectoriales AEPD”. Madrid. 2017.

C. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES

- STC, 207/1996, de 16 de diciembre.
- STC 292/2000, de 30 de noviembre. Rec. 1463/2000. LALEY 11336/2000.
- SAN, Sección 1ª, de 25 de julio de 2006. Rec. 210/2005.
- Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el mantenimiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. BOE-A-2006-21648.
- Resolución R/00259/2010, de 8 de marzo de 2010, de la Agencia Española de Protección de Datos. Procedimiento N.º AAPP/00075/2009. LALEY 300/2010.
- Resolución de archivo de actuaciones AEPD. Expediente N.º: E/00153/2010 de 14 de mayo de 2010. LALEY 1470/2010.
- Resolución AEPD N.º: R/01490/2011. Procedimiento N.º: TD/00164/2011.
- Resolución AEPD. Expediente N.º: E/02726/2012. LALEY 2498/2012.
- SAN 26 de septiembre 2013. LALEY 144527/2013.
- Resolución de la AEPD R/00037/2015. Procedimiento N.º AP/00046/2014, de 29 de enero de 2015
- Resolución: R/02316/2016. Procedimiento N.º AP/00025/2016
- Resolución: R/03107/2017. Procedimiento N.º AP/00016/2017
- Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad. BORM 25 octubre 2017. LALEY 16958/2017.
- Resolución AEPD 00308/2018 de 15 de marzo de 2018. Proc. PS/00483/2017. LALEY 13516/2018.

D. LEGISLACIÓN

- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. BOE-A-1889-4763

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. BOE-A-1985-12978.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. BOE-A-1996-1069.
- Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. BOE-A-1997-17574.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal. BOE-A-1999-23750
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE-A-2002-22188
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE-A-2006-7899
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. BOE-A-2008-979.
- Ley Orgánica 8/2013, de 28 de noviembre, para la mejora de la calidad educativa. BOE-A-2013-12886
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE-A-2015-11430.
- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE-A-2015-8222),
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE-A-2015-10565
- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

E. RECURSOS WEB

- <https://www.datax.es/blog-actualidad-proteccion-datos/es/los-nuevos-derechos-de-los-ciudadanos-europeos-en-proteccion-de-datos/> Ref. 11 de junio de 2018.
- MUÑOZ, J. *Protección de datos en centros educativos públicos y privados*. Disponible en <http://www.joaquinmunoz.com/2009/05/12/proteccion-de-datos-personales-en-centros-educativos-publicos-y-privados/> Ref. 20 de mayo 2018.
- <http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/infoeduca>
- VALPUESTA CONTRERAS. D. *El nuevo artículo 22 quater de la Ley de Protección Jurídica del Menor*. 2015. <https://www.fiscal.es>

